



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO  
**Demandados:** COLPENSIONES y OTROS  
**Procedencia:** JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA n.º 78  
**Radicado n.º:** 05001-31-05-010-2015-00097-01 (O2-21-215)

En Medellín, a los veintinueve (29 ) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación impetrados por COLPENSIONES y por la parte actora, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública de seguridad social, dentro del proceso ordinario instaurado por **MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO** en contra de **COLPENSIONES, GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, en el cual se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a **INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, con radicado n.º 05001-31-05-010-2015-00097-01 (O2-21-215).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

### 1. ANTECEDENTES

Mediante vocera judicial, **MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO** pretende que se declare la que las sociedades demandadas incumplieron con su obligación de efectuarle los aportes en pensiones, y que es beneficiaria del régimen de transición, y de consiguiente que, se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagarle la pensión de vejez, los intereses moratorios y las costas procesales, tras señalar que laboró en las sociedades demandadas de agosto de 1984 a diciembre de 1995, como operaria y devengando el salario mínimo

legal vigente, sin que su historia laboral refleje cotizaciones en pensiones por este interregno de tiempo, por lo que dichas empresas faltaron a sus obligaciones, al tiempo que el ISS faltó a su obligación de cobrar coactivamente los aportes; que contaba con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, acreditaba 707 semanas al junio de 2005, y cumplió 55 años de edad el 21 de agosto de 2012, mismo año en el que efectuó su última cotización; que el 21 de septiembre de 2012 solicitó al COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la que fue denegada mediante Resolución GNR 10911 del 28 de noviembre de 2012 por no acreditar la densidad mínima de semanas cotizadas, negativa confirmada por Resolución GNR 106827 del 23 de mayo de 2013, y en su defecto, le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, indemnización que le fue reliquidada a través de la Resolución GNR 372180 del 17 de octubre de 2014.

### **1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La demanda fue admitida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 29 de enero de 2015 (doc. 02 pág. 68), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

Una vez notificada, (ibíd. pág. 70) COLPENSIONES dio respuesta a la demanda a través de gestora judicial el 24 de febrero de 2015 (ibíd. págs. 71 a 78), la cual se opuso a las pretensiones formuladas, toda vez que la ley impone a los empleadores la obligación de realizar la afiliación y pagar los respectivos aportes de sus trabajadores, y hasta tanto no se cumpla con ello, no es posible contabilizar ese tiempo para reconocer en su favor prestaciones económicas; a la vez de proponer las excepciones de mérito que denominó: falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, compensación, buena fe, e imposibilidad de condena en costas.

Finalmente, por auto del 26 de abril de 2018 (ibíd. doc. 185), dispuso la vinculación de la INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN, en calidad de litisconsorte necesaria por pasiva, así como le designó curador ad litem a ésta y a GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN, auxiliar de la justicia que una vez notificado y posesionado (ibíd. 210), allegó contestación el 9 de julio de 2018 (ibíd. pág. 215 a 217), manifestando frente a las pretensiones de la demanda, que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, al tiempo de proponer las excepciones de mérito que nominó: pago y prescripción.

## **1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 5 de febrero de 2021 (docs. 11 y 12), oportunidad en la cual el cognoscente de instancia declaró que la demandante sostuvo dos contratos de trabajo a término indefinido, el primero con la INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN entre el 1º de agosto de 1984 y el 30 de junio de 1985, y el segundo con la sociedad GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN del 1º de julio de 1985 al 30 de diciembre de 1995, condenando a dichas sociedades a pagar a COLPENSIONES 221,15 semanas de cotización en pensiones adeudadas a favor de la actora por tales periodos, a la vez de ordenar a la entidad pública efectuar el cobro coactivo de tales cotizaciones. Consecuentemente, ordenó a COLPENSIONES que, una vez hubiere obtenido el importe de las cotizaciones adeudadas y sus intereses, estudie la procedibilidad de reconocer a la demandante la pensión de vejez, contabilizando además las cotizaciones tenidas en cuentas al momento en que se le reconoció la indemnización sustitutiva por vejez y compensando el monto de lo pagado por dicha indemnización de ser procedente el reconocimiento pensional. De igual forma, absolvió a las demandadas de las demás pretensiones incoadas, gravando en costas procesales a las sociedades GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN y INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN, a favor de la demandante.

## **1.3. APELACIÓN**

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por la apoderada judicial de COLPENSIONES, en cuyo sustento afirmó que no se probó una relación laboral ininterrumpida entre la demandante y las sociedades del extremo pasivo, toda vez que la prueba testimonial no da cuenta de la prestación personal del servicio, de la subordinación, de la remuneración, ni de los extremos temporales de la supuesta relación laboral. En adición, esgrime que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición pensional, y que COLPENSIONES ha registrado en la historia laboral efectivamente las relaciones de trabajo reportadas a favor de la demandante, sin que los empleadores citados a juicios hubieren incurrido en mora según dicha historia laboral, de suerte que, no surgió obligación de recaudo. Agrega, que a la demandante se le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, habiendo cobrado la demandante la suma reconocida. Finaliza sosteniendo que su representada no puede ser condenada en costas.

A su turno, la vocera judicial de la parte demandante, apeló parcialmente la decisión de instancia alegando que si bien se condiciona a COLPENSIONES a reconocer y pagar la

pensión de vejez luego del pago efectivo de las cotizaciones, debe declararse que la demandante tiene derecho al pago de las mesadas pensionales a partir del 1º de octubre del año 2012, pues con las semanas de cotización en pensiones que el *a quo* ordenó pagar, la demandante acreditaría más de 1000 semanas de cotización, de suyo que causó su derecho a percibir las mesadas pensionales luego de haber realizado su último aporte a pensiones en septiembre de 2012, por ser beneficiaria del régimen de transición pensional. Aduce que lo anterior, es procedente en vista de que debe esperarse que se paguen las cotizaciones en mora por parte de los empleadores, por lo que si tal pago se dilata en el tiempo, la demandante se vería afectada por la prescripción de las mesadas pensionales, sin que su representada deba acarrear con las consecuencias de la negligencia del que le reportó una novedad de retiro para el año 1991, a pesar de que la relación laboral continuó hasta el año 1995, y siendo que el fondo de pensiones actuó de buena fe. Finaliza solicitando que se declare que el pago de las mesadas pensionales debe darse con los respectivos intereses moratorios, causados a partir de la fecha en que se efectuó el pago de los periodos de cotizaciones omitidos por el empleador.

#### **1.4. CONSULTA**

Toda vez que la decisión de primera instancia fue desfavorable a los intereses de COLPENSIONES, de igual modo se analizará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

#### **1.5. ALEGACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA**

En el trámite de segunda instancia, la apoderada judicial de COLPENSIONES, alegó que las declaraciones testimoniales rendidas al interior del proceso, no son claras, contundentes y coherentes para la demostración de los elementos del contrato de trabajo alegado por la señora MARIA NUBIA BLANDON GIRALDO con las sociedades vinculadas. Que no se puede presumir prestación del servicio, ni puede concluirse la misma únicamente con los aportes en pensiones registrados en la historia laboral, o solamente a partir de las anotaciones de mora patronal en la historia laboral. Concluye indicando que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es incompatible con la pensión de vejez, y por ello, las semanas tenidas en cuenta para reconocer la primera, no pueden contabilizarse para causar la segunda.

A su turno, la mandataria judicial de la parte actora, alegó que probada la relación laboral, aunado a la potestad de cobro coactivo que tiene COLPENSIONES, corresponde a esta última gestionar el cobro de los valores adeudados por concepto de aportes al sistema de

seguridad social en pensiones a favor de la demandante, sin que el reconocimiento de la pensión de vejez esté sujeta a la efectiva cancelación de lo adeudado.

## 2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por COLPENSIONES y la parte actora, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, aunando a este respecto que la etapa de alegatos de conclusión en segunda instancia no es una oportunidad para proponer nuevos puntos de apelación, sino meramente para ampliar los argumentos respecto de los puntos de apelación manifestados en la audiencia de juzgamiento, a la par de estudiarse integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, para lo cual se plantea el análisis de los siguientes:

### 2.1. PROBLEMAS JURÍDICOS:

El *thema decidendi* en la presente Litis se centra en definir: ¿Sí se configuraron los elementos esenciales del contrato de trabajo, a saber: la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y dependencia y la remuneración, así como los extremos temporales frente a las sociedades INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN y GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN, y en caso afirmativo, si dichas sociedades deben responder por el cálculo actuarial o título pensional con destino a COLPENSIONES, por cotizaciones en pensiones a favor de la accionante?, y de ser así, ¿si debe declararse que la demandante tiene derecho al pago de las mesadas pensionales a partir del 1º de octubre del año 2012 por ser beneficiaria del régimen de transición pensional, si deben pagarse los intereses moratorios a partir de la fecha en que los empleadores efectúen el pago de los periodos de cotizaciones omitidos, y si debe proferirse pronunciamiento sobre la prescripción de las mesadas pensionales?

### 2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en tanto se acreditó la relación laboral, sus extremos temporales y la omisión en la afiliación y pago de cotizaciones en pensiones, **modificándolo** en punto a las fechas exactas en que se declara la relación laboral y la omisión de los empleadores en la afiliación en pensiones, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

### 2.2.1 Contrato de trabajo

El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual el trabajador recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Definición de la cual se extrae los elementos esenciales y definitorios del contrato de trabajo, a saber: (i) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; (ii) la continua subordinación o dependencia del trabajador, que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes; y (iii) un salario como retribución del servicio (artículo 23 del CST).

Reunidos dichos elementos esenciales, se presume que existe un contrato de trabajo, y no deja de serlo en razón del nombre que se le asigne, ni de las condiciones particulares del patrono, ni de las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se emplee, ni del sitio en donde se realice, ni de la naturaleza de la remuneración, ni de cualquier otra circunstancia (artículo 24 del CST).

Por consiguiente, al trabajador solo le basta demostrar la ejecución personal de un servicio, para que opere en su favor la presunción de que tal relación está regida por un contrato laboral (CSJ SL del 29-11-1958; SL del 05-05-1982, radicado 8247; SL del 27-06-2000, radicado 14096; SL del 17-05-2011, radicado 38182; SL10546-2014, radicado 41839; SL15507-2015, radicado 45068; SL16528-2016, radicado 46704; SL781-2018, radicado 47852; SL4444-2019, radicado 58413; SL-577-2020, radicado 68636; SL-3126-2021, radicado 68162).

Las anteriores disquisiciones tienen estribo en los principios mínimos del derecho de trabajo consagrados en el artículo 53 de la CP, entre los cuales se encuentra el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes contractuales de una relación laboral, dirigido básicamente a dar mayor valor a los hechos que realmente acontecieron, sobre las formas y pactos que las partes estipularon, por lo que, acreditada la concurrencia de los elementos esenciales de una relación laboral, la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo resulta incontestable, muy a pesar de la calificación jurídica que las partes hubieren hecho de la relación contractual que las vincula.

En adición, *“además de corresponderle al trabajador la prueba del hecho en que esa presunción se funda, esto es, la actividad o prestación personal del servicio, con lo que se establece que ese trabajo fue dependiente o subordinado, mientras la contraparte no*

demuestre lo contrario, también al promotor del proceso le atañe acreditar otros supuestos relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo el extremo temporal de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización de la terminación del vínculo, entre otros” (Subrayas de la Sala, SL16110-2015).

Con el fin de zanjar este aspecto de la controversia, cumple señalar que le competía a la parte actora demostrar la prestación personal del servicio a las sociedades del extremo pasivo de la litis, y que en caso de haberla probado, le concernía a dichas sociedades demostrar que dicha prestación del servicio nunca estuvo presidida de subordinación jurídica, como elemento esencial, tipificador y diferenciador del contrato de trabajo, entendida como la *“aptitud o facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador y de vigilar su cumplimiento en cualquier momento, durante la ejecución del contrato, y la obligación permanente del trabajador de obedecerlas y acatarlas cumplidamente”* (CSJ SL-6258 del 01-y07-1994, SL-22259 del 02-08-04, SL-16528 del 26-10-2016).

Ello así, la Sala encuentra acreditado que la señora LUCELLY URIBE DE PÉREZ con c.c. n.º 21.681.880, ha sido la representante legal de las sociedades INDUSTRIA CAMISARERA DE COPACABANA EN LIQUIDACIÓN (doc. 02 pág. 176) y GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA. (doc. 02 pág. 171), así como también obra en el legajo que la señora LUCELLY URIBE con c.c. n.º 21.681.880, en calidad de representante legal de dichas sociedades, certificó mediante documento fechado en el año 1995, que la demandante laboró para la primera sociedad desde agosto de 1984 a agosto de 1985, y para la segunda desde agosto de 1985 a diciembre de 1995, desempeñando el cargo de operaria y devengando el SMLMV (doc. 02 pág. 63), certificación que la señora URIBE reiteró mediante declaración extraprocesal del 5 de diciembre de 2019, en la que afirmó que la demandante laboró desde 1984 hasta 1995 en el cargo de operaria (doc. 02 pág. 260).

Luego, conviene resaltar lo adocetrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL16528-2016, en la cual reiteró:

*“Acerca de esta clase de certificaciones allegadas al proceso provenientes de la demandada (...), conviene recordar lo dicho al respecto en sentencia de la CSJ SL, 2 ag. 2004, rad. 22259, en cuanto a que:*

*(...) no hay razón para dudar sobre la veracidad de sus datos, y si bien la demandada en la respuesta al libelo adujo que le expidió al actor certificaciones y*

*constancias pero con la finalidad de implorar préstamos bancarios o solicitar empleo (folio 38), no cumplió con la carga de contraprobar lo certificado (...). En relación a la valoración de aquella clase de documentos, la Corte se pronunció en sentencia del 8 de marzo de 1996 radicado 8360, oportunidad en la cual puntualizó:*

*“(..). El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral...”.*

*Por lo dicho, tal probanza acredita la existencia de una relación laboral subordinada.”*

Ahora bien, se tienen que no existe ninguna prueba en contrario de lo indicado en la certificación en cita, pues si bien la historia laboral de la demandante demuestra que dichos empleadores apenas le cotizaron al sistema de seguridad social hasta el 23 de diciembre de 1981 (doc. 02 pág. 133), ello apenas daría cuenta del incumplimiento del empleador a su obligación de afiliar y pagar la seguridad social en pensiones de la demandante, más no desdice de su vínculo laboral, sin que obre documento alguno en el plenario “(...) *de tal contundencia que no deje sombra de duda(...)*” que los hechos plasmados en la certificación son falsos. Es más, revisada la testimonial, de las declaraciones de ROSALBA RESTREPO ESCOBAR y ARACELLY DEL SOCORRO ACVEDO DUQUE (docs. 07 y 08), se advierte que ellas se limitaron a indicar que fueron compañeras de trabajo de la demandante al servicio de las sociedades convidadas a juicio, como compañeras operarias de confección, ininterrumpidamente desde 1984 a 1995 cuando la empleadora les indicó que no continuaría con dicha empresa y puso fin a la relación laboral, por manera en ningún momento negaron la relación laboral entre la demandante y las sociedades INDUSTRIA CAMISARERA DE COPACABANA EN LIQUIDACIÓN y GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA., como para destruir los hechos admitidos documentalmente con la pluricitada certificación.



En consonancia con todo lo expuesto, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión en términos del artículo 61 del CPT y de la SS, con el acervo probatorio recabado, no queda otra vía para la Sala que tener como cierto el contenido de lo que se expresó en la constancia que expidió la representante legal de INDUSTRIA CAMISARERA DE COPACABANA EN LIQUIDACIÓN y de GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA., en calidad de empleadoras de la demandante, sobre el contrato de trabajo, el tiempo de servicios y el salario, “(...) *pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial (...)*”, debiéndose confirmar la sentencia de instancia en cuanto con acierto declaró que la demandante sostuvo dos contratos de trabajo a término indefinido con INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN y con la sociedad GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN.

Empero, habrá de modificarse el extremo inicial de dicha relación laboral, en tanto la referida certificación indica que la demandante inició labores en agosto de 1984, sin indicar el día del mes que comenzó a laborar, por lo que debe tenerse como día de inició el último día de dicho mes, y no el primer día como declaró el *a quo*. Ello, en atención a que la prueba testimonial no cuenta con la contundencia y fuerza de convicción necesaria que permita siquiera entrever el día exacto de la relación laboral, y en cuanto a la imprecisión de la prueba documental en comento, la máxima corporación de cierre de nuestra especialidad en decisión SL1362-2020, asuntó que “*en casos en los que no se conocen con exactitud los extremos temporales, se podrían dar por establecidos en forma aproximada, cuando se tenga seguridad sobre la prestación de un servicio en un determinado período; esto es, bien el año o el mes, pues si las pruebas allegadas al proceso hacen referencia a un mes de un determinado año y no se precisa el día o la fecha, como mínimo debe tomarse el último día del mes al que se hace referencia, igual ocurre cuando se refiere a la anualidad, pues la ausencia de precisar con exactitud la data de su iniciación ora su finalización, no conlleva de una manera imprescindible a negar los derechos laborales que se reclaman (...).*”

Por manera que el vínculo laboral de la demandante se dio primero con INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN entre el 31 de agosto de 1984 y el 30 de junio de 1985, y en segundo término con la sociedad GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN del 1º de julio de 1985 al 1º de diciembre de 1995.

### **2.2.2 Cálculo actuarial.**

Definido como está, que la demandante sostuvo dos contratos de trabajo a término indefinido, el primero con la INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN

LIQUIDACIÓN entre el 30 de agosto de 1984 y el 30 de junio de 1985, y el segundo con la sociedad GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN del 1º de julio de 1985 al 1º de diciembre de 1995, pasa a revisar la Sala si en tal lapso el empleador efectuó la afiliación en pensiones y el pago del aporte que le correspondía.

Para ello, se tiene que en la Resolución GNR 372180 del 17 de octubre de 2014 (doc. 02 pág. 49 a 52), se indica que la demandante cuenta con 815 semanas de cotización, de las cuales la INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA le cotizó 41,71 entre el 1º de septiembre de 1984 y el 19 de junio de 1985, y la sociedad GÓMEZ URIBE Y CIA. LTDA. le cotizó 316,57 del 31 de julio de 1985 al 3 de octubre de 1989 y del 2 de febrero de 1990 al 23 de diciembre de 1991 (doc. 02 pág. 50). Información que coincide con lo plasmado en la historia laboral más actualizada obrante en el plenario (doc. 02 pág. 129 a 138), según la cual la empleadora INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA afilió a la demandante del 1º de septiembre de 1984 hasta el 19 de junio de 1985, cuando reportó la novedad de retiro, mientras que la empleadora GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA. la afilió del 31 de julio de 1985 al 3 de octubre de 1989, cuando le reportó la novedad de retiro, volviéndola a afiliar en pensiones el 2 de febrero de 1990, hasta el 23 de diciembre de 1991, cuando nuevamente le reportó la novedad de retiro.

Es decir, que la empleadora INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA no afilió a la demandante para el 31 de agosto de 1984, ni del 20 al 30 de junio de 1985, para un total de 12 días en mora por falta de afiliación, equivalentes a 1,71 semanas de cotización. Mientras que la sociedad GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA. omitió afiliar en pensiones a la demandante del 1º al 30 de julio de 1985, del 4 de octubre de 1989 al 1º de febrero de 1990, y del 24 de diciembre de 1991 al 1º de diciembre de 1995, para un total de 1564 días de mora por falta de afiliación, equivalentes a 223,28 semanas de cotización. Es decir, que en total, se desprenden 225,13 semanas de cotización omitidas por dichos empleadores.

No obstante, ha de relievase que el *a quo* profirió condena en contra de la INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA por un total de 5,86 semanas de cotización, por lo que habrá de modificarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, ordenar el pago de 1,71 semanas de cotización. En igual sentido, se observa que el cognoscente de instancia condenó a GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA. a pagar en total 215,29 semanas de cotización, y si bien en esta instancia se concluye que realmente dicha empleadora debía responder por un total de 223,28 semanas de cotización, cumple relieves que en este punto se analiza la sentencia únicamente en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, en tanto la parte actora no apeló tal ítem, por lo que no podrá modificarse la sentencia de primera instancia a favor de la parte actora y en contra de la parte

demandada, debiéndose confirmar entonces que el empleador GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA. debe pagar un total de 215,29 semanas de cotización. En total, en esta instancia se declarará que dichos empleadores le adeudan a la demandante un total de **217 semanas de cotización** por omisión de afiliación al sistema general en pensiones.

Estima pertinente la Sala reiterar que en el caso de omisión en la afiliación, no puede reprocharse que COLPENSIONES no hubiere efectuado el cobro del aporte en mora, pues en tal evento es el empleador quien debe responder por el periodo en el que no efectuó la cotización, como así lo ha pregonado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL9808-2015, en los siguientes términos: *“vale decir que no existe alguna regla derivada de la jurisprudencia, que pregone la exención al empleador frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social, cuando la administradora de fondos de pensiones no adelanta las respectivas acciones de cobro, pues es esa una obligación inmanente y permanente, que no puede eludirse en perjuicio de los afiliados ni de las entidades encargadas del pago de las obligaciones, (...)”*.

Ahora, respecto de la manera como los empleadores deben responder por esas cotizaciones, basta señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 692 de 1994, ante la mora del empleador en el pago de los aportes, responde por la totalidad del aporte, es decir, el porcentaje que le corresponde al trabajador y empleador, y además con los intereses moratorios respectivos, cuya satisfacción se materializa en un cálculo actuarial, y así lo ha delineado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL9808-2015, en donde expresa que: *“una vez que quedó demostrada esa situación de mora del empleador, además de que se había entablado una pretensión en tal sentido, lo cierto es que era a los jueces de instancia a quienes incumbía establecer las respectivas consecuencias jurídicas, bien que fuera la responsabilidad patronal en el pago de las prestaciones o simplemente el pago de los aportes adeudados a través de un cálculo actuarial.(...)”*

Ello así, importa resaltar que ciertamente las empleadoras INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN y GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN deben responder por el cálculo actuarial, conforme al precedente jurisprudencial que en derredor del tema ha construido la Corte Suprema de Justicia, ya que necesariamente es el empleador quien debe responder y trasladar el cálculo actuarial a favor de COLPENSIONES y, a su vez, esta última, validar el tiempo laborado como tiempo cotizado y proceder al reconocimiento pensional.

### 2.2.3. Pensión de vejez.

Ahora, colige la Sala que la demandante fue beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues contaba con 36 años de edad al 1º de abril de 1994 (doc. 02 pág. 19). Siendo que la normatividad que le era aplicable a la demandante era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en razón a que la demandante fue trabajadora del sector particular, los requisitos para acceder a la pensión instada sobre edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto pensional son los establecidos en los artículos 12 y 20 de la normativa en comento, a saber, 55 años de edad y 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, o 500 semanas de cotización entre el 22 de agosto de 1992 y el 21 de agosto de 2012 (fecha en que cumplió los 55 años de edad); al tiempo que el disfrute de las mesadas pensionales iniciaría a partir del 1º de octubre de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, por haberse reportado su última cotización para el 30 de septiembre de 2012 (doc. 02 pág. 131).

Sin embargo, debe resaltar la Sala que para el 29 de julio de 2005, la demandante contaba apenas con 708,71 semanas de cotización (doc. 02 pág. 135), por lo cual no cumplía con la exigencia de las 750 semanas requeridas por el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de transición más allá del 31 de julio de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2014, ya que cumplió los 55 años de edad apenas hasta el 21 de agosto de 2012.

Así entonces, ha de aclararse que si bien en ésta providencia se reconoce que los empleadores del extremo pasivo de la litis adeudan 217 semanas de cotización a favor de la demandante por omisión de afiliación en pensiones, y que con tales semanas de cotización la demandante efectivamente acreditaría más de 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, lo que le permitiría causar la pensión de vejez bajo el régimen de transición en los términos ya indicados; lo cierto es que *a quo* condicionó el reconocimiento de esas semanas de cotización a su efectivo pago por parte de los empleadores, de suyo que el reconocimiento pensional quedó supeditado al pago del condigno cálculo actuarial en aplicación a lo establecido en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, literal e), según el cual: *“En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”*.

En este sentido, debe recalcar la Sala que la apelación de la parte activa del juicio, en ningún momento confutó lo decidido en el fallo de primera instancia en derredor de haber condicionado el reconocimiento de las semanas adeudadas, al efectivo pago del cálculo actuarial, al contrario, la alzada en este sentido únicamente atinó a reiterar cómo COLPENSIONES actuó de buena fe. Por manera que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., esta Sala carece de competencia para pronunciarse al respecto, máxime que en este orden de ideas, tal punto se analiza únicamente en virtud al grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, y por tanto no podría modificarse tal decisión haciendo más gravosa la situación de la entidad pública.

No soslaya la sala en este ítem, que la alzada por activa sí manifestó en la etapa de alegatos de conclusión en segunda instancia que debía ordenarse a COLPENSIONES pagar la pensión de vejez sin condicionar tal reconocimiento pensional al pago efectivo del cálculo actuarial, empero, tal afirmación no surte ningún efecto procesal por ser evidentemente inoportuna, ya que la etapa de alegaciones finales está estatuida únicamente para ampliar los argumentos respecto de los puntos de apelación manifestados en la audiencia de juzgamiento, más no es una oportunidad adicional para apelar aspectos que se omitieron en la oportunidad procesal debida.

Corolario de lo expuesto, en esta instancia no pude variarse la conclusión del juzgado de instancia, según la cual el reconocimiento pensional quedó supeditado al pago del condigno cálculo actuarial en aplicación a lo establecido en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, literal e), y toda vez que no se ha probado el pago efectivo del referido cálculo actuarial, no pueden tenerse en cuenta aún las 217 semanas de cotización adeudadas por los empleadores a efectos de estimar si la demandante cumple o no con los requisitos del Acto Legislativo 01 de 2005 para continuar siendo beneficiaria del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

En esa medida, tampoco puede declarar la Sala la fecha a partir de la cual la demandante causaría su derecho a percibir mesadas pensionales, en tanto en el proceso se acreditan únicamente un total de 815,85 semanas cotizadas durante toda su vida laboral (doc. 02 pág. 129), sin que pueda contabilizarse ninguna de las semanas que se ordena pagar a los empleadores hasta que éstos procedan con su efectivo pago, de suyo que no puede declararse que la demandante tenga derecho a la pensión de vejez.

Pasando al punto de la prescripción, ha de memorar la Sala que conforme a los artículos 488 del C.S.T. y 151 del CPTSS, los tres años del término prescriptivo laboral “se cuentan

*desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible*", de lo que sigue que para contabilizar el mismo frente a las posibles mesadas pensionales a favor de la demandante, primero debe acreditarse la causación y disfrute de las mesadas. Es decir, que para contabilizar el término prescriptivo, prístinamente debe concluirse que la demandante reunió los requisitos mínimos legales de edad y tiempo de cotizaciones para causar el derecho a la pensión de vejez, además de verificar la fecha a partir de la cual tendría derecho al disfrute de las mesadas pensionales según el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. Pero como en el *sub studium*, se itera, se acreditan únicamente un total de 815,85 semanas cotizadas a favor de la demandante, al no poder contabilizarse ninguna de las semanas que se ordena sufragar a los empleadores hasta que éstos procedan con su efectivo pago, ha de concluirse que la obligación al pago de mesada pensionales no se ha causado, lo que de suyo implica que la jurisdicción puede pronunciarse sobre la prescriptibilidad de un derecho que todavía no es exigible.

### **2.2.6 Intereses moratorios**

En lo relativo a los intereses moratorios pretensos, es menester que, como lo tiene dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 16 de octubre de 2012 (rad. 42.826): *"de forma excepcionalísima y particular, esta Corporación ha estimado que la imposición de los intereses moratorios no opera cuando la decisión de negar la pensión tiene un respaldo normativo o porque proviene de la aplicación minuciosa de ley"* (CSJ SL787-2013).

Situaciones exonerativas de tal condena que se presentan en el *sub lite*, pues a la fecha en que la demandante elevó la reclamación de su derecho ante la administradora de pensiones, y aún a la fecha de la presente decisión, no cuenta con el mínimo de semanas requeridas para optar por la prestación, ya que como se evidencia sólo con las semanas que se tendrían en cuenta a través del cálculo actuarial podría consolidar el derecho pensional. Entonces, no pude endilgársele responsabilidad a COLPENSIONES que la haga pasible de condena por intereses moratorios, dado que se evidencia que la entidad codemandada actuó bajo los parámetros establecidos por la jurisprudencia y la ley.

### **2.3. COSTAS**

Costas en esta instancia a cargo de MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, de conformidad con lo normado en el artículo 365 del CGP, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$560.000, equivalentes a medio SMMLV a favor de COLPENSIONES, toda vez que era la

única entidad afectada con la apelación propuesta. Sin costas en esta instancia en contra de COLPENSIONES, pues si bien propuso la alzada, la sentencia se analizó integralmente en favor de dicha entidad pública en virtud al grado jurisdiccional de consulta.

Las de primera instancia se confirman, toda vez que las sociedades GÓMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN e INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN fueron vencidas en juicio y ejercieron una postura de oposición y excepción a las pretensiones formuladas por la actora.

## 2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: MODIFICAR** los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 5 de febrero de 2021 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, los cuales quedarán en los siguientes términos:

***“PRIMERO: DECLARAR** que entre la señora MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO, identificada con c.c. N.º 42.981.943, en calidad de trabajadora, y la sociedad INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN existió un contrato de trabajo a término indefinido que tuvo por fecha de inicio el 31 de agosto de 1984 hasta el 30 de junio de 1985. **DECLARAR** que entre la misma señora MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO y la sociedad GOMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de julio de 1985 y el 1º de diciembre de 1995, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta sentencia.*

***SEGUNDO: CONDENAR** en consecuencia a las sociedades GOMEZ URIBE Y COMPAÑÍA LTDA. EN LIQUIDACIÓN e INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA LTDA. EN LIQUIDACIÓN, al pago a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES de las cotizaciones en mora por falta de afiliación correspondientes a la afiliada MARIA NUBIA BLANDÓN GIRALDO, así: la INDUSTRIA CAMISERA DE COPACABANA por un total de 1,71 semanas de cotización adeudadas por el 31 de agosto de 1984 y del 20 al 30 de junio de 1985, y*

*GÓMEZ URIBE Y CÍA. LTDA. un total 215,29 semanas de cotización adeudadas del 1º al 30 de julio de 1985, del 4 de octubre de 1989 al 1º de febrero de 1990, y del 24 de diciembre de 1991 al 1º de diciembre de 1995."*

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás, la sentencia que se revisa en consulta.

**TERCERO: COSTAS** en esta instancia a cargo de MARÍA NUBIA BLANDÓN GIRALDO, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$560.000, y a favor de COLPENSIONES. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

**Comuníquese y cúmplase.**



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



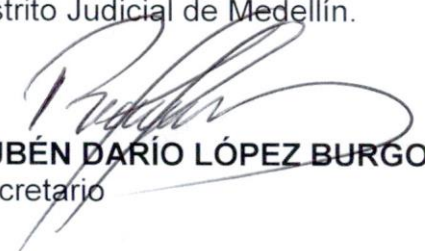
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario